

Omar RINCÓN
EDITOR

José NATANSON • Jacinto RODRÍGUEZ • Ramón COLOMBO • Marielos MONZÓN • Manuel TORRES
Eduardo MARENCO • Álvaro MURILLO • Ricardo VALENCIA • Fernando MARTÍNEZ • Elsa Cecilia PIÑA
Margarita MARTÍNEZ • Gustavo ABAD • Fernando MOLINA • Jacqueline FOWKS • Silvia PÁEZ • José Pedro DÍAZ
María Eugenia LUDUEÑA • Francisco MARTORELL • Carlos Eduardo LINS • Ana Lucía MAGRINI

¿POR QUÉ NOS ODIAN TANTO?

[Estado y medios de comunicación
en América Latina]

¿POR QUÉ NOS ODIAN TANTO?

[Estado y medios de comunicación
en América Latina]

Omar Rincón
Editor

Centro de Competencia en Comunicación
para América Latina
Friedrich Ebert Stiftung

Editor:

Omar Rincón

Autores:

José Natanson
Jacinto Rodríguez
Ramón Colombo
Marielos Monzón
Manuel Torres
Eduardo Marengo
Álvaro Murillo
Ricardo Valencia
Fernando Martínez
Elsa Cecilia Piña
Margarita Martínez
Gustavo Abad
Fernando Molina
Jacqueline Fowks
Silvia Páez
José Pedro Díaz
María Eugenia Ludueña
Francisco Martorell
Carlos Eduardo Lins
Ana Lucía Magrini

Ciudad:

Bogotá, 2010

Diseño:

Nelson Mora Murcia

Producción:

Centro de Competencia en Comunicación
para América Latina, C3 FES, www.c3fes.net.

ISBN 978-958-8677-00-2

Este texto puede ser reproducido con previa autorización con
un objetivo educativo y sin ánimo de lucro.

[CONTENIDO]

[Introducción]	
¿HAY QUE DEFENDER A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO O AL ESTADO DE LOS MEDIOS Y LOS PERIODISTAS?	5
Omar RINCÓN	
[Prólogo]	
MEDIOS Y "NUEVA IZQUIERDA": ALGUNOS APUNTES IMPRESIONISTAS	15
José NATANSON	
MÉXICO	
CRÓNICA DE UNA TRANSICIÓN FALLIDA	23
Jacinto RODRÍGUEZ	
REPÚBLICA DOMINICANA	
UNA LOCURA MEDIÁTICA	37
Ramón COLOMBO	
GUATEMALA	
CON LOS MISMOS ANTEOJOS	55
Marielos MONZÓN	
HONDURAS	
GOLPE DE ESTADO, ELECCIONES Y MEDIOS EN UNA DEMOCRACIA FALLIDA	71
Manuel TORRES	
NICARAGUA	
CONVIENDO CON EL ENEMIGO	89
Eduardo MARENCO	
COSTA RICA	
LA TENTACIÓN CONTENIDA	105
Álvaro MURILLO	
EL SALVADOR	
LA ESTRATEGIA DEL CAMBIO	115
Ricardo VALENCIA	
PANAMÁ	
EL PODER DE LOS MEDIOS	123
Fernando MARTÍNEZ	
VENEZUELA	
INTOLERANCIA A LA CRÍTICA Y HEGEMONÍA COMUNICACIONAL MENOSCABAN LIBERTAD DE EXPRESIÓN	149
Elsa Cecilia PIÑA	
COLOMBIA	
ESPIONAJE, PRESIONES E INTIMIDACIONES AL RELATO PERIODÍSTICO	165
Margarita MARTÍNEZ	
ECUADOR	
EL CLUB DE LA PELEA... PODER POLÍTICO VS PODER MEDIÁTICO	183
Gustavo ABAD	

BOLIVIA	
DE LA POLARIZACIÓN A LA HEGEMONÍA	199
Fernando MOLINA	
PERÚ	
EL PÚBLICO SIGUE PERDIENDO	217
Jacqueline FOWKS	
PARAGUAY	
LA ENDOGAMIA DEL PODER (Ó) EN BUSCA DE UNA NUEVA IDENTIDAD DEMOCRÁTICA	225
Silvia PÁEZ	
URUGUAY	
DESCUBRIENDO A LA CENICIENTA	245
José Pedro DÍAZ	
ARGENTINA	
TODO O NADA... ESTADO Y MEDIOS EN PIE DE GUERRA	263
María Eugenia LUDUEÑA	
CHILE	
LA SUMA DE LOS MEDIOS (Y DE LOS MIEDOS)	289
Francisco MARTORELL	
BRASIL	
ENTRE EL PLURALISMO INFORMATIVO, LA CENSURA JUDICIAL Y EL PRAGMATISMO POLÍTICO	303
Carlos Eduardo LINS	
[Ensayo]	
Medios de comunicación y Estado en América Latina	
MUCHO GOBIERNO Y MUCHOS MEDIOS, POCO PERIODISMO Y POCAS CIUDADANÍAS	313
Ana Lucía MAGRINI – Omar RINCÓN	

EL CLUB DE LA PELEA... PODER POLÍTICO VS PODER MEDIÁTICO

Las acusaciones del Presidente Rafael Correa contra los medios privados sorprendieron a éstos poco preparados para la crítica y menos para la autocrítica. En lugar de periodismo han hecho oposición y propaganda en contra de la Ley de Comunicación y se niegan a someterse a mecanismos de regulación. El gobierno, por su parte, no ha podido garantizar un debate nacional de gran altura sobre este tema. El oportunismo de ciertos funcionarios pone incluso en peligro el proyecto de los medios públicos. Fortalecer la investigación así como recuperar las normas éticas del buen oficio son para algunos periodistas y académicos las tareas más urgentes para salir de la crisis y estancamiento del periodismo ecuatoriano.

Gustavo Abad

gabad@andinanet.net

Periodista e investigador social, se ha desempeñado como reportero y editor en varios diarios ecuatorianos, principalmente en las áreas de Investigación y Cultura. Actualmente combina el periodismo con la docencia universitaria. Ha publicado “El monstruo es el otro: la narrativa social del miedo en Quito” (2005). Entre otros trabajos académicos y periodísticos están: “El periodismo olvidado: las instituciones mediáticas ante la rebelión de las audiencias” (2006); “Entre la indignación moral y la corrección política: el melodrama como recurso mediático” (2007); “Comunicación y política: el surgimiento del periodismo público en el Ecuador. Caso *El Telégrafo*” (2009). Docente asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Colabora con *El Telégrafo*.

La sensación de estar en medio de dos fuegos es inevitable al mirar los noticieros o leer los diarios en el Ecuador. Por la mañana, junto con el baño de agua y jabón, fatalmente viene el de noticias. Los residuos del primero se van por la cañería, pero los del segundo se quedan pegados todo el día a modo de preocupación ideológica y política. Cada día, gobernantes y medios de comunicación conforman un coro de voces alteradas en medio del cual resulta difícil encontrar orientación. Es como si entre los dos hubieran construido un tinglado exclusivo para dejar al resto el papel de espectadores.

El motivo más reciente de este enfrentamiento es el proyecto de Ley de Comunicación, que se debate accidentalmente desde diciembre pasado en la Asamblea Nacional. Esta es una aspiración histórica del país, que alcanzó el estatus de Mandato Constitucional en la última Asamblea Constituyente de 2008 y consta en la nueva Constitución (artículo 19 y transitoria primera) Eso significa que en el Ecuador existe una conciencia mayoritaria a favor de una ley que regule la actividad de los medios y otros actores de la comunicación. En cambio, la mayoría de los medios privados está en contra.

Sin embargo, ni el gobierno ni los medios privados han logrado proponer un debate de gran altura al respecto. En su lugar, mantienen una atmósfera de tensión. El discurso recurrente del gobierno es que la ley permitirá frenar los “abusos de la prensa corrupta”. Los medios han puesto todo su esfuerzo en demostrar que se trata de una maniobra del “régimen dictatorial” del presidente Rafael Correa, quien gobierna desde el 15 de enero de 2007 bajo el lema de la “Revolución Ciudadana” y un discurso radical de izquierda.

Por primera vez en la historia de este país, los medios ocupan el banquillo de los acusados. Al contrario de sus antecesores, el actual mandatario tiene un discurso crítico y muchas veces descalificador respecto de los medios privados. Pero estos no se quedan atrás y responden de manera visceral. Entre ellos no hay posibilidad de diálogo, porque cada uno se declara víctima del otro. Por eso, la clave de todo esto parece estar en la manera cómo cada uno construye y vende su propia imagen y la de su oponente. ¿A qué se refiere Correa cuando habla de “prensa mediocre”? ¿A qué se refieren los medios privados cuando hablan de “gobierno autoritario”? Veamos algunas pistas.

Políticos y periodistas en deuda con el derecho a la información

Es la mañana del 12 de junio de 2007. Set de entrevistas del canal *Telemazonas*. A un lado, Ricardo Patiño, entonces ministro de Economía. Al otro, Jorge Ortiz, entrevistador principal de ese canal y uno de los más críticos al gobierno.

Patiño le debe al país una explicación de por qué se reunió, cuatro meses antes, con empresarios de la firma Abadi & Company, en un cuarto de hotel, para escuchar una propuesta sospechosa sobre renegociación de la deuda externa. El video de esa conversación llega a los canales de manos de un ex asesor de Patiño, como represalia por haber sido despedido. Los medios bautizan el caso como los “Pativideos” y lo tratan más como un espectáculo que como una investigación periodística.

Todo indica que el ministro está a punto de perder los privilegios que otorga el poder. Lo que el periodista no sabe es que el entrevistado está más convencido que nunca de que la mejor defensa es el ataque.

A la primera oportunidad, el ministro saca sus cartas:

Ricardo Patiño: Usted está desinformado (...) no sabe lo que dice, está mal informado, nervioso (...) Usted es el autor intelectual de esto, el presentador oficial de los “Egasvideos” (en alusión al banquero Fidel Egas, dueño del canal)...

Jorge Ortiz (con risa nerviosa): Ja, ja, ja...

RP: ... ¡Sonríase!...

JO: No me sonrío, me río a carcajadas...

RP: Así como el señor Egas es dueño de este canal, es dueño del Banco del Pichincha, y está organizando una campaña fenomenal en contra del gobierno, de la cual usted es, lastimosamente, el artífice material...

Los televidentes asisten a un intercambio, no de preguntas y respuestas, sino de acusaciones entre un funcionario agresivo y un periodista nervioso. Patiño no le responde al país por qué manejó de manera poco clara un tema de interés público. Ortiz no puede refutar la acusación de que trabaja en un canal de propiedad de un banquero y que participa en una campaña mediática contra el gobierno. El derrame de bilis continúa de parte y parte. El público recibe espectáculo en lugar de información. Sigamos:

RP: Para encontrar a los corruptos hay que hacerlo a escondidas...

JO: ¿Y ya los ha encontrado?

RP: Ya encontramos a los primeros (...) Tengo ya la información de cuántos millones de dólares tenía el notario Cabrera –el fallecido notario José Cabrera, autor del delito de captación ilegal de dinero, conocido como sistema piramidal– en la banca ecuatoriana. El famoso notario Cabrera tenía cientos de millones de dólares aupados por algunos segmentos de la banca y nunca le preguntaron: mire señor Cabrera ¿Usted cobra tanto por dar las certificaciones de un título de propiedad? Estaban más preocupados por tener depósitos (...) ¿Por qué no les pregunta a los señores de la banca cuántos presos hay por el caso Cabrera?...

JO: ¿Y cuántos presos hay por el caso Abadi? Pero le contesto...

RP: ¡Contésteme qué pasó con esos depósitos millonarios en la banca! ¿Usted se ha preocupado de investigar eso, tan acucioso que es?

JO: ¿Ha visto que en *Teleamazonas* presentamos incluso una serie sobre el caso Cabrera?

RP (casi gritando): ¡Escondiendo a la banca! ¡Dígallo con claridad! Escondiendo a la banca (...) porque ustedes son propiedad de la banca... ¡Desenmáscárense! Nosotros somos abiertos, francos y claros. Ustedes ¡Desenmáscárense!

JO: Abiertos, claros y francos poniendo cámaras ocultas en un cuarto y grabando a la gente. Nadie les cree ese cuento...

RP: La mayor parte de los ecuatorianos nos creen. Vea usted todas las encuestas...

JO: Eso no significa que tengan razón...

RP: Pregunte por su credibilidad...

JO: Seguramente está por debajo de la suya...

RP: ¡Por los suelos!...

JO: Sí, debe estar por los suelos...

El periodista no puede evitar pasar de cuestionador a cuestionado. Después, no puede rebatir la acusación –por segunda vez– de que existe una vinculación de intereses entre el medio de comunicación y la banca privada. Finalmente, admite que su credibilidad está por los suelos y comienza a interceder por la banca privada:

JO: La Asociación de Bancos Privados quiere que se bajen las tasas de interés y las comisiones pero no por imposición sino por diálogo. ¡No me interrumpa!...

RP: Pero usted interrumpe siempre. Yo también lo voy a interrumpir. Le pregunto ¿Cuántos años han dialogado y no han bajado las tasas de interés?...

JO: (nervioso) Yo no trabajo con la banca...

RP (sorprendido): ¿No trabaja con la banca?

JO: No trabajo con la banca...

RP: Pero si usted es empleado del señor Egas...

JO (más nervioso): Pero en *Teleamazonas*, no en el banco...

RP (irónico): Aaah, no están relacionados lo uno con lo otro. Aaah ya, siga nomás...

Ortiz pierde completamente el libreto. No logra que su entrevistado lo respete. Sonríe nervioso y avergonzado por quedar expuesto públicamente. Entonces opta por la sumisión. Baja la vista y acepta el castigo:

RP: Estoy seguro que usted, cuando me vaya, hablará pestes de mí...

JO: Ni una palabra...

RP: Semanas enteras...

JO: Ni una palabra...

Así, la autoridad elude su obligación de rendir cuentas gracias a que tiene al frente a un periodista disminuido, sin argumentos, a quien resulta fácil poner a la defensiva con solo mencionar la vinculación de su medio con un sector cuestionado en el Ecuador, como la banca privada. Los dos pierden credibilidad y le quedan debiendo al país su derecho a la información.

Detrás del ruido están las debilidades

En este cruce de discursos emocionales, el gobierno solo reconoce una condición de los medios: “corruptos”; y los medios una sola del gobierno: “dictatorial”. La munición gruesa que intercambian día a día parece el reflejo de dos grandes poderes en pugna. El ruido se asemeja al de un choque de trenes con toda su potencia. Sin embargo, cuando se hace el silencio, salen a flote las debilidades de parte y parte.

La principal debilidad del gobierno es no tener otro narrador de su propuesta que el presidente Correa, cuyo temperamento siempre lo pone al borde de la confrontación en lugar del diálogo. La debilidad de los medios consiste en su baja credibilidad debido a los casos en que se encuentran claramente vinculados con el poder económico. También en el hecho de no haber podido desembarazarse de ciertas figuras que acaparan el discurso, como Jorge Ortiz (*Teleamazonas*), Emilio Palacio (*El Universo*), quienes aportan más rabia y escándalo que ideas. Tres años después de iniciada la pelea, siguen en lo mismo.

Un caso ilustrativo de periodista con aspiraciones políticas es el de Carlos Vera, una figura de la televisión que renunció a su trabajo como entrevistador del canal *Ecuavisa* para iniciar su carrera política como opositor de Correa. Vera, famoso en otros tiempos por acorralar y no dejar hablar a sus entrevistados, ahora es uno de los que más reclaman libertad de expresión. Para ello, ha organizado varias concentraciones y encabezado marchas “en defensa de la libertad”. Los periodistas acuden, pero no en calidad de manifestantes, sino a trabajar en la cobertura del proselitismo de un político en ciernes.

“Esta es una pelea de machos. Ahí está lo anacrónico” dice Ana Karina López, Defensora del Lector del diario *Hoy*, uno de los medios más críticos al gobierno. Se refiere a la encarnizada disputa entre el presidente y ciertas figuras mediáticas. López realiza una actividad complicada en la que un cuestionamiento a los medios puede ser interpretado como favorable al gobierno y viceversa. Para ella, lo que ocurre se explica, en gran parte, porque los medios han ocupado el vacío dejado por la oposición. “La prensa ha sido el único espacio que le ha dicho al poder aquí

hay problemas. Eso se debe al vacío que existe en un país que está tan huérfano de políticos, no sólo de oposición sino de todas las tendencias”.

La apreciación de López coincide con el argumento del gobierno de que los medios son sus principales opositores. Pero esto tiene su explicación. “El Ecuador implosionó políticamente. Las cúpulas que dirigían los partidos ya no existen, se perdieron o fueron desacreditadas. Entonces la única correspondencia del poder viene a ser la prensa”, señala la defensora, y aclara que la prensa no se reduce a los Palacio, Vera, Ortiz, sino que está en los cientos de periodistas menos visibles que hacen el oficio día a día.

Aunque no hay una entidad que lleve datos exactos, las cifras aproximadas señalan que en el Ecuador funcionan alrededor de mil medios de comunicación, entre radio, prensa y televisión. No hay registro certero de medios digitales. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) registra 849 radios y 84 canales de televisión abierta. Se calcula que los medios impresos de carácter masivo bordean los cien en todo el país, entre diarios y revistas. La gran mayoría, alrededor del 90%, es de propiedad privada. El resto se divide entre públicos y comunitarios.

Pese a ello, el debate parece haber quedado secuestrado entre la figura dominante del presidente Correa y algunas figuras sobredimensionadas de los medios, que defienden el discurso corporativo de sus empresas. Así, la calidad del debate se acerca más al de una batalla premoderna con hachas de piedra. Entre el poder político y mediático parecen haber conformado una especie de “club de la pelea”, como si el uno representara toda la política y el otro toda la comunicación.

El falso dilema de la Ley de Comunicación

La tensión entre medios y gobierno alcanza su clímax en 2009, en torno a la Ley de Comunicación. En este debate se juegan aspectos cruciales para el mejoramiento del periodismo en el Ecuador. Entre ellos, las medidas antimonopolio; la prohibición de que los dueños de bancos sean también dueños de medios; la figura de la responsabilidad ulterior respecto de las consecuencias sociales de los mensajes mediáticos; la distribución equitativa de frecuencias entre medios públicos, privados y comunitarios; la cláusula de conciencia y las condiciones laborales de los trabajadores de prensa; el derecho a la réplica y la rectificación; el acceso a las nuevas tecnologías; los derechos de los niños; la producción nacional; el control de la publicidad estatal; los organismos reguladores; la Defensoría del Público; las veedurías ciudadanas.

Sin embargo, el gobierno no ha podido alcanzar grandes acuerdos sociales en torno a estos temas. Esto ha facilitado a los medios construir la versión de que se trata de un atentado a la libertad de expresión. En los titulares no se habla de proyecto de ley, sino de “Ley mordaza”. A la larga, ni el gobierno ni los medios le han propuesto a

la población un mecanismo claro para deliberar. Lo único que ha recibido el público es un cruce de acusaciones entre ambas partes.

Las noticias de los medios muchas veces son refutadas por el mandatario durante los llamados enlaces nacionales de los sábados –160 hasta febrero de 2010– que son espacios de rendición de cuentas en directo por radio y televisión, sin que las emisoras y canales privados estén obligados a transmitirlos. Sí lo hacen la radio y la televisión públicas. No obstante, la mayoría de medios elabora noticias a partir de esos enlaces.

Otro espacio donde el gobierno genera su discurso son las cadenas nacionales –233 en 2009– a las que tiene derecho por ley para dar a conocer sus obras. También está la publicidad oficial contratada en diversos medios –5,8 millones de dólares en 2009 según datos oficiales citados por la prensa– que colocan al gobierno como el mayor anunciante en el país. Los medios privados son los mayores beneficiarios de esta inversión publicitaria a la que nunca han cuestionado en términos de rentabilidad sino políticos.

“Yo creo que, en el fondo, existe una competencia por la construcción de la realidad. El gobierno quiere construir su relato cuando los constructores tradicionales del relato han sido los medios”, dice César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, entre cuyos objetivos están el mejoramiento del ejercicio periodístico y la defensa de la libertad de expresión.

Ricaurte escarba en la historia reciente y saca en claro que, entre las causas de este enfrentamiento, está una saga de gobiernos débiles, ante los cuales los medios aparentaban una fuerza que en realidad no tenían. “En medio de esa debilidad de los gobiernos, los medios fueron los únicos dueños del relato. El momento en que surge el gobierno de Correa, con una fortaleza enorme, comienza a disputarle a los medios ese relato. Al parecer, el presidente piensa que el acto de gobernar también implica el acto de editar la realidad”, reflexiona Ricaurte, quien proviene del periodismo y actualmente ejerce también como Defensor del Televidente en *Ecuavisa*, uno de los canales privados más antiguos del país.

El proyecto que se discute en la Asamblea Nacional es el resultado de la fusión de tres proyectos anteriores, impulsados por los asambleístas, Rolando Panchana (oficialista), César Montúfar (oposición) y Lourdes Tibán (oposición). El legislativo nombró una comisión encargada de juntar las mejores ideas en una sola propuesta. El resultado, un proyecto que disgusta tanto a los medios como al gobierno debido a sus múltiples defectos desde el procedimiento (nunca se propició un debate social) hasta los contenidos (confunden comunicación con información mediatizada). La intención de crear un Consejo de Comunicación con capacidad reguladora y sancionadora agudizó la discordia debido al peligro de crear un ente concentrador de poderes.

Mientras el gobierno y las organizaciones sociales procuran reencauzar el debate y mejorar el contenido de la ley, los medios privados hacen activismo en contra de la existencia misma de ésta, bajo la premisa de que “la mejor ley es la que no existe”. Los medios afiliados a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) mantienen hace varios meses una publicidad bajo el lema “+RESPETO”, orientada a convencer a los lectores de las bondades del actual sistema de medios privados. Nunca antes había sido tan evidente la propaganda en lugar de la información.

En medio de estas tensiones, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) impuso una suspensión de 72 horas a *Telemazonas* (del 22 al 25 de diciembre de 2009) por acumulación de tres infracciones. El canal no ha podido demostrar con argumentos periodísticos la validez de la información por la que fue sancionado, que demuestra apresuramiento, descontextualización y tendencia a afectar políticamente al gobierno.

Un primer amparo solicitado por la estación ante un juzgado fue negado por improcedente. Esto puso en riesgo los primeros acuerdos legislativos en torno a la Ley de Comunicación, cuyo debate, aprobación y reglamento se prevé que tardará hasta mediados de 2010. No obstante, la televisora insistió y logró que el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo declarara inejecutables las sanciones por errores de procedimiento.

Periodismo y no proselitismo

El 14 de junio de 2009, diario *Expreso* publicó un reportaje titulado “Las obras que ejecuta el hermano del presidente”. El trabajo periodístico, que tuvo un despliegue de cinco entregas durante la semana siguiente, reveló que un grupo de empresas, a las que estaba vinculado Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente, habían obtenido contratos con el Estado por un monto de entre 80 y 100 millones de dólares.

Aunque la información no revelaba delitos específicos, sí ofrecía pistas acerca de un tema clásico en el manejo de la cosa pública en el Ecuador: el tráfico de influencias. El ambiente cargado de suspicacias motivó al editor del diario a insertar un párrafo inusual en los textos periodísticos: “EXPRESO publica desde hoy el resultado de una investigación que ha tomado más de tres meses. No es, como dice el presidente Correa, por ‘una revancha’ por su maltrato a la prensa. Es porque son recursos públicos, y porque nada menos que empresas vinculadas con el hermano del Presidente tienen grandes contratos en su Gobierno. Algo que no tiene antecedentes ni parangón en la historia del Ecuador. Y lo hacemos porque es la ineludible responsabilidad de una prensa libre en bien de la ética del poder”.

La reacción inicial del gobierno fue decir que se trataba de otra maniobra mediática para desacreditarlo. Pero ese argumento apenas duró unas horas, pues los datos

del reportaje no pudieron ser desmentidos. Se trataba de una investigación nítida, madurada durante un año e intensificada durante los últimos tres meses. El equipo de investigación, liderado por el periodista Juan Carlos Calderón, buscó documentos, contrastó cifras, verificó escrituras, entrevistó a funcionarios públicos y privados y, sobre todo, contrastó sus descubrimientos con las versiones de los involucrados.

Con ello, el país tuvo una demostración de la diferencia entre hacer política contra el gobierno desde los medios y hacer periodismo de investigación siguiendo las normas del buen oficio. “Nadie ha podido decir que la investigación que hicimos sobre los negocios de Fabricio Correa es falsa. Ni el propio Presidente. Lo que ha hecho (el Presidente) y a mí me parece gravísimo, es considerar que lo hicimos de mala fe, para joderlo...”, asegura Calderón, uno de los pocos periodistas en el Ecuador que ha logrado capitalizar el resultado de su trabajo en textos de largo aliento. Su libro “Naufragio: migración y muerte en el Pacífico” es un trabajo revelador sobre el tráfico de migrantes, víctimas por igual de los traficantes como de las autoridades corruptas.

A Calderón le resbalan las críticas del gobierno a los medios. “Es que yo no trabajo para él. No estoy para caerle bien ni para caerle mal. Tampoco trabajo para el dueño del medio. Yo he dicho siempre que mi único jefe es el lector y mi obligación es garantizar su derecho a estar bien informado”. Y es de los que creen que la única opción que le queda al periodismo ecuatoriano es mejorar su calidad para recuperar la confianza del público. “La confianza es como un banco en el que el periodista es el depositario de la verdad y eso implica una enorme confianza del lector. Su responsabilidad social es mantener la confianza. Yo creo que el periodismo ecuatoriano, en este momento, 18 de noviembre de 2009, vive un estancamiento filosófico, porque nadie se ha puesto a pensar en el oficio”.

El trabajo liderado por Calderón obligó a la Fiscalía General del Estado a iniciar una investigación respecto de los negocios del hermano del mandatario. El propio presidente Correa se apresuró a tomar distancia y ordenar que se anulen todos los contratos entre el Estado y las empresas de su hermano. Sin embargo, no pudo evitar el costo político para el gobierno. Como estrategia de defensa, el mayor de los Correa es ahora una de las voces más visibles de la oposición y un entrevistado constante en los medios más críticos al gobierno. “Correa versus Correa” es uno de los titulares más recurrentes.

Calderón y su equipo –integrado por periodistas de bajo perfil y solo conocidos entre su círculo de amigos– hicieron lo que tenían que hacer: periodismo y no proselitismo. La mayoría de medios privados, donde se impone un discurso corporativo de defensa del negocio, ha hecho lo contrario: proselitismo y no periodismo.

Durante los tres años del gobierno de Correa la prensa ecuatoriana exhibe pocos trabajos de investigación contundentes. Ha perdido muchas oportunidades de reivindicar su lugar. La cobertura del conflicto entre Ecuador y Colombia ha estado marcada más por el deseo de los medios de demostrar alguna complicidad entre el

gobierno y la guerrilla de las FARC que por mostrar la dimensión geopolítica del tema. La intención de afectar políticamente al gobierno ha disminuido notablemente la calidad de la información –conclusiones apresuradas, falta de correspondencia entre titulares y contenidos– y ha permitido al mandatario ponerla fácilmente en duda.

La investigación periodística como salida

Otro de los que no se resignan a que todo se quede en una pelea entre el presidente y los dueños de los medios es Arturo Torres, coordinador de investigación del diario *El Comercio*. Torres cumple con el perfil del investigador forjado en el propio oficio. Junto con Calderón, cierran la lista de los periodistas que han publicado libros de reportajes en la última década. Su libro “El juego del camaleón: los secretos de Angostura” es un relato acerca de las operaciones de inteligencia que facilitaron el bombardeo que acabó con la vida del líder guerrillero Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008 y que significó la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia.

Quizá por su condición de investigadores, Torres y Calderón coinciden en que la única respuesta apropiada de parte de los medios es fortalecer su capacidad investigativa. Proponen que el periodismo ecuatoriano debe trazarse otras metas, relacionadas con la investigación y el servicio público. A los dos les molesta que el debate se haya reducido a una tira y afloja entre el gobierno y las corporaciones. Están convencidos de que es posible abrir un amplio debate por fuera de esos límites.

Según Torres, “Es necesario que la sociedad entienda que dentro de los medios existen diversas corrientes de pensamiento”. Está convencido de que solo a los periodistas les corresponde sacar a flote esa diversidad, opacada por los discursos dominantes tanto del gobierno como de las empresas mediáticas. “Creo que los periodistas hemos limitado nuestro papel y no hemos querido jugar el rol que nos corresponde. Hemos delegado todo a los editores, a los dueños y nosotros hemos quedado relegados”.

Uno de los pocos investigadores de casos de corrupción, Torres está dispuesto a invertir los años que sean necesarios en el fortalecimiento de una nueva cultura periodística en el Ecuador. “Los periodistas no tenemos claro cuál es nuestro oficio, no somos suficientemente autocríticos, nos falta trabajar en los conceptos y en las teorías acerca de cuál es nuestra posición. En las salas de redacción pocas veces aflora el tema de la responsabilidad social”.

Torres no se siente aludido por las críticas del gobierno. “Particularmente, creo que esta es una excelente oportunidad para demostrar cuál es el periodismo que sirve. Que este momento sirva como una catarsis para que hagamos una limpieza de las malas prácticas y nos pongamos a reinventar y potenciar el buen periodismo”.

Aunque no está de acuerdo con que la regulación venga del Estado, tampoco se opone a la existencia de una Ley de Comunicación. “Oponerse a la existencia de esa ley es atemporal. Ya que hemos llegado a esto, veamos cuánto podemos hacer para que la ley sea un producto útil y no el resultado de algún interés político”.

Antes de Correa los medios ya estaban en el banquillo

Aunque los protagonistas más visibles de este enfrentamiento son el actual presidente Rafael Correa y los medios tradicionales, el desgaste de la credibilidad de estos últimos se puede rastrear en episodios ocurridos varios años atrás.

Uno de ellos es la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, el 20 de abril de 2005. Esa tarde de lluvia en Quito, la gente volcó su indignación no solo contra un gobierno desprestigiado por sus actos de corrupción, sino también contra los medios, por haber dado la espalda a las protestas. Miles de personas rodearon *Teleamazonas* para exigir que ese canal enviara reporteros a la calle. Después, varios reporteros y camarógrafos estuvieron a punto de ser agredidos por una multitud como demostración extrema de indignación generalizada respecto de los medios.

Esa inconformidad latente fue hábilmente usada por Correa luego de su llegada al poder. El mandatario necesitaba posicionarse ante la población como un símbolo radical de cambio. Ya había criticado a los partidos tradicionales, a los banqueros corruptos, a los empresarios inmorales. Tenía que cerrar el círculo enfrentando a unas instituciones respecto de las cuales había la sensación de que eran intocables: los medios tradicionales. Y la arremetida verbal los sorprendió poco preparados para la crítica.

El académico Hernán Reyes, de la Universidad Andina Simón Bolívar, intenta resumir las causas del cuestionamiento público a los medios. Primero, “Cada vez es mayor la participación de los medios como actores políticos, es decir, como defensores del *statu quo* y de los valores del sistema dominante e injusto”. Segundo, continúa Reyes, “Se ha profundizado el divorcio entre la realidad social y la realidad expuesta por los medios. Eso les ha generado un paulatino descrédito especialmente a partir de la década de los 90. Las instituciones mediáticas ya no están exentas de un juicio negativo por parte de la ciudadanía”. Y un tercer elemento, señala el sociólogo y comunicador, “Los vientos de cambio a nivel político en América Latina. Gobiernos como el de Chávez, Correa, Morales explican los fracasos de las democracias, del orden constituido y del rol que han jugado los medios en ese orden. Esto ha hecho que se produzca un cuestionamiento frontal hacia los medios, que no se había visto en décadas anteriores”.

En efecto, ante la crítica del gobierno, los medios han puesto en su defensa un principio tan universal como abstracto: la libertad de expresión. Asumieron que su

manera de entender la libertad es la misma que la del resto de la sociedad. Entonces cayeron en la tentación de demostrarle al poder político quién era el más fuerte. La excesiva confianza en su posición como formadores de opinión pública los llevó a cometer un acto de poca modestia. Aceptaron pelear en el terreno del adversario, es decir, en el campo de la política en lugar de hacerlo desde el campo del periodismo y la información.

Reyes ensaya una segunda explicación para el caso ecuatoriano. “El gobierno ha planteado una visión demasiado maniqueísta y está ayudando a confundir a la ciudadanía, a crear odios viscerales antimedios. Por su parte, los medios se han negado a la autocrítica. Eso los ha puesto contra la pared porque han actuado como juez y parte. Han hecho mal en responder en términos políticos y no periodísticos”.

Según datos de la encuestadora Informe Confidencial, en febrero de 2007, en Quito, el 20% de la población confiaba “mucho” en los medios y el 33% confiaba “algo”, es decir un 53% de valoración positiva. En tanto que el 33% confiaba “poco” y el 13% confiaba “nada”, es decir, un 46% de valoración negativa. Los datos en Guayaquil son más favorables para los medios con un 66% positivo y un 34% negativo. De todos modos, no demuestran ser incuestionables. En julio de 2009, según la misma encuestadora, los medios tenían un 55% de valoración positiva y un 43% de valoración negativa en Quito. Mientras en Guayaquil alcanzaban un 68% positivo y un 31% negativo. La confrontación con el gobierno de Correa casi en nada ha mejorado su valoración social.

Una cultura periodística forjada en los medios privados

El investigador Guillermo Navarro en su libro “Los poderes fácticos”, publicado en 2006, se refiere, entre otras cosas, a la estructura de propiedad de los principales medios en el Ecuador. Navarro registra varios grupos cada uno con diversas empresas, entre medios y de otra naturaleza: Isaías (tv abierta, tv por cable, radios, actualmente incautadas por el Estado), Eljuri (tv abierta, tv por cable), Vivanco (diario, radios), Egas (tv abierta, revistas, empresa editorial, cines), Mantilla (diarios, empresa editorial, radios, servicio de datos, seguros, automotores, inmobiliaria) Mantilla Anderson (tv abierta, diario, empresa editorial, radio, servicio de datos, automotores), Alvarado (tv abierta, revistas), Pérez (diario), Martínez (diarios, radio, industria gráfica). El trabajo de Navarro ofrece múltiples datos sobre la conexión entre los principales medios privados y los grupos económicos.

En el Ecuador es famosa la época de la guerra informativa entre los medios controlados por el grupo Isaías (dueño de Filanbanco y de medios como *TC Televisión*) y los medios controlados por el grupo Egas (dueño del Banco del Pichincha y de medios como *Telemazonas*). Cada uno dirigía su información a convencer al público

de que las empresas de su contrincante estaban al borde de la quiebra. Así, los medios vinculados con grupos económico libraron una batalla grotesca y jugaron con el derecho a la información durante por lo menos una década desde mediados de los 90 hasta bien entrado el nuevo siglo.

La intensidad de la batalla no aminoró ni siquiera cuando los líderes del grupo Isaías, los hermanos William y Roberto Isaías, huyeron a Miami para ponerse a salvo de la justicia en varios juicios iniciados contra ellos como principales causantes de la crisis bancaria de 1999. Cuando la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) incautó, el 8 de julio de 2008, 195 empresas de ese grupo —entre ellas, los canales *TC Televisión*, *Gamavisión* y *Cable Noticias*— la población reaccionó con entusiasmo. No obstante, muchos medios hablaron de un “atentado a la libertad de expresión”.

Los medios privados no son el paraíso de la libertad de expresión que dicen ser. La organización Fundamedios aplicó entre 2008 y 2009 una encuesta a 372 periodistas de cinco ciudades (Quito, Guayaquil, Machala, Manta y Nueva Loja) sobre el respeto a las libertades en su trabajo.

A la pregunta “¿En alguna ocasión alguna nota periodística de interés público no se publicó por presiones de alguna naturaleza?” 109 (29,2%) de los consultados responden “sí” y 42 (11,2%) responden “a veces”, lo cual también es una respuesta afirmativa. Esto significa que 151 (40,4%) de los consultados considera que existe censura en la información. A la pregunta “¿De qué sectores suelen provenir más estas presiones o amenazas?” 107 (28,7%) responden “del gobierno”, 106 (28,4%) señalan a “los directivos del propio medio”, y 94 (25,2%) a “las empresas privadas o anunciantes”.

De todas maneras, César Ricaurte, director de esa organización señala que no necesariamente todos los casos significan censura, sino que también los periodistas pueden confundir una exigencia de mayor calidad con un acto de censura.

Por su parte, un informe de 2008, del Observatorio de Medios de la Universidad de las Américas (UDLA) firmado por el investigador Fernando Checa, señala que las mayores amenazas al trabajo de los periodistas no provienen del poder político sino de factores internos y externos relacionados con los propios medios. Según el informe, el 38% de 120 periodistas consultados afirma haber tenido que “sacrificar principios profesionales por temor a perder su trabajo”. Señala también que el 44% de los periodistas se autocensura por presión de los dueños y directores. Además, el 78% asegura que la mayor amenaza proviene de grupos de poder.

Los medios públicos, un proceso en consolidación

El Ecuador cuenta desde 2008 con tres medios de comunicación públicos: diario *El Telégrafo*, canal *Ecuador TV* y emisora *Radio Pública del Ecuador*, un quiebre dentro de una cultura informativa dominada históricamente por los medios privados. Los

medios públicos surgen en medio de una gran tensión entre un gobierno con discurso revolucionario y unas fuerzas políticas y económicas alineadas con la derecha empresarial y con una marcada influencia en la agenda de los medios privados.

Esto significa que en el Ecuador de inicios del siglo XXI no solo está en disputa un modo de hacer y gobernar –función del campo político– sino también un modo de pensar y decir –función del campo mediático– y más todavía cuando el poder político ha identificado, tanto a los partidos como a los medios tradicionales, como parte del pasado que propone dejar atrás.

Los medios públicos nacen ligados económicamente al Estado. Los medios privados usan ese argumento para cuestionar la legitimidad de los públicos y dan por hecho que esa dependencia económica los compromete con el discurso oficial.

“Los medios públicos están en construcción. El diario, la radio y la televisión tienen procesos separados. En ningún caso funcionan como un ‘pool’ de medios” aclara de entrada, Carol Murillo, subdirectora de *El Telégrafo*. Para ella, lo que está en juego en el Ecuador no es la libertad de expresión sino la posibilidad de construir un periodismo de servicio público, puesto que “Los medios privados siempre fueron el brazo ideológico de los grupos económicos de este país”.

En rigor, *El Telégrafo*, *Radio Pública* y *ECTV* son los tres únicos medios públicos del Ecuador, puesto que han sido declarados como tales y procuran sacar adelante una propuesta acorde a su condición. Uno de sus principales escollos es que la mayoría de sus periodistas se formaron en los medios privados. Los públicos no han logrado todavía trazar las líneas maestras de un periodismo marcadamente distinto. Tampoco han logrado mejorar sus niveles de audiencia ni proponer otros modelos de producción. Es cuestión de tiempo, dicen sus directivos.

No entran en este grupo otros medios que están bajo administración del Estado como resultado de procesos de incautación a los banqueros causantes de la crisis de hace una década. Los privados los acusan de ser favorables al gobierno y reclaman que sean devueltos a sus dueños anteriores. Hasta ahora, el gobierno no ha podido vender esos medios para devolver el dinero a los perjudicados por la banca quebrada.

El apareamiento de los medios públicos abre grandes expectativas respecto de la construcción de una agenda periodística basada en la observación de las demandas sociales y las respuestas políticas. “Lo público, en unos casos, había sido borrado de las ideas. En otros casos había sido asociado con lo burocrático y lo que no funciona. Pero lo público son las políticas de educación, de salud, lo que tiene que ver con las mayorías. El medio público tiene que recuperar la información como un servicio a la sociedad”, dice Murillo, como una declaración de principios.

Un ejemplo de la importancia del periodismo público se dio a fines de enero de 2010, cuando los reporteros y columnistas de *El Telégrafo* rechazaron públicamente la intención del gobierno de crear un nuevo medio “de corte popular” bajo la

infraestructura del diario público. El proyecto de ciertos funcionarios es contar con un medio obsecuente con su proyecto político, bajo la etiqueta de “popular”. En ese mismo contexto, un intento de censura fue denunciado por el director de *El Telégrafo* y propició un amplio debate nacional. En este país, no existe memoria de que los medios privados hayan denunciado con la misma frontalidad un acto de censura o injerencia de los poderes políticos o económicos.

Al final de cuentas, entre la nula capacidad del gobierno y los assembleístas para gestionar una Ley de Comunicación de consenso social, la información distorsionada y la propaganda opositora de los principales medios privados, más el oportunismo de ciertos funcionarios cercanos al poder, la relación entre medios y gobierno en el Ecuador permanece estancada en una furiosa tensión. Así, las posibilidades de asumir la información como un bien o un servicio público, sujeto a regulación, queda relegada en medio del ruido generado por este singular “club de la pelea”.

Quito, febrero de 2010

Cuando la emoción ahoga la reflexión: varios casos sintomáticos

El rasgo que mejor caracteriza a los medios privados tradicionales en su confrontación con el gobierno es la emoción, que anula la investigación. Por lo menos eso ocurrió en varios casos en los que la mayoría de esos medios perdieron la oportunidad de hacer un buen trabajo periodístico porque su interés era capitalizar políticamente los hechos.

La relación Medios y Estado en Ecuador

El gobierno ha escogido a los periodistas y a los medios como LA oposición política. Y los periodistas se creyeron políticos. La lucha es sin reglas y por ahora va ganando el presidente.

Hay un estilo de gobierno basado en la confrontación y desde esa lógica se informa.

El proyecto de ley del sistema de comunicación social tiene al país enfrentados en dos bandos: los que quieren controlar el poder “corrupto” de los medios y los que quieren controlar la “dictadura” del presidente.

El gobierno ha diseñado un sistema integral de control de la esfera pública basado en la alta propaganda, la creación de medios públicos y la contundencia comunicativa del presidente.